

El diagnóstico de Aznar

ANTXON SARASQUETA

EL líder del PP considera que hemos entrado en una nueva etapa de la vida española. Es necesario un nuevo discurso. El discurso que no puede hacer González, el jefe del Gobierno y líder del PSOE, está atrapado en su propia trampa: una política económica productiva —como la que se necesita para superar la crisis— perjudica a las clases pasivas y bolsas de fraude (paro institucionalizado), que son su electorado.

Después de los discursos de la democracia (posfranquismo) y del europeísmo (cambio socialista), Aznar considera que la sensibilidad de la calle está en la economía y en los impuestos. Razón por la cual desde ayer el PP ha iniciado una campaña nacional para gastar menos, ahorrar y producir más. En la conversación con Aznar se descubre que el líder popular tiene la seguridad de que las actuales tendencias y el tiempo, juegan a su favor. Lo cual produce un ánimo de serenidad, que es el que se descubre en la figura del dirigente popular.

He oído muchas veces que el joven líder del PP carece de carisma. No enardece a las masas. Es un castellano sobrio y, quizás, distante. Sin embargo, se puede observar su propio proceso de maduración en el liderazgo político. En los asuntos de Estado, sus vasos comunicantes con el Rey y el presidente del Gobierno (fluidos a pesar de la natural confrontación política), han contribuido a darle una perspectiva sobre la gobernabilidad del país. Dispone, asimismo, de una perspectiva histórica, fundamental para la preparación de una dirección política. Y él mismo hace autocrítica sobre las diferencias y escenarios multiformes con los que tiene que lidiar dentro de su propio partido.

Aznar sabe que es muy difícil —casi imposible— alterar el rumbo que ha marcado González a España, dentro de Europa. Alianzas y referencias. "No podía hacer otra cosa", dice Aznar. "Era imposible que se hubiera aliado con la Thatcher", reflexiona (una década de gobierno paralelo). Si cabe, en todo caso, para España, ganar algún margen de maniobra. Aznar

defiende el principio de subsidiaridad en la CE, recuperando la mayor parte de los poderes posibles para los órganos de gobierno locales y nacionales. En perjuicio de una Comisión de Bruselas moldeada por el socialista Delors. Cree en eso y lo defiende para este país.

A nivel interno, Aznar no quiere ni oír hablar de un pacto de "gran coalición" con el PSOE. No antes de las próximas elecciones. Luego —aunque no lo dice abiertamente— todo será posible. Las circunstancias y la política aconsejan no deestimar ninguna probabilidad.

(Paréntesis del cronista, para señalar que un pacto de "gran coalición" de socialistas y populares "contra" los nacionalistas, según la estrategia y el sentir de Martín Villa, sería uno de los mayores errores políticos, porque se volvería a las "guerras" del período inicial de la transición. ¿Quiere decir que si fuera necesario un pacto nacional —"Estado de necesidad"— no sería posible contar con los nacionalistas vascos y catalanes?).

Desde el gobierno, como desde la vivencia del ciudadano de la calle, la situación global del país aparece difícil. El líder del principal partido de la oposición, cree que así es. Los números y el follón general así lo demuestran. Y es en los momentos de crisis —como escribió Nixon— cuando un líder político revela su verdadera talla.

El Gobierno ya no tiene más remedio que hablar de "dolor". El mensaje de González y los dirigentes socialistas es claro: sangre, sudor y lágrimas. Tiempo de heroísmos y de paciencia (González ha manifestado su satisfacción por la —forzada— calma sindical). Se percibe, además, que los gobernantes socialistas comienzan a encontrarse a gusto en su papel. Para cualquier gobernante es fácil descubrir que la población se acongoja ante una crisis de esta naturaleza que multiplica sus incertidumbres. Mientras que la oposición tiene que acertar en un mensaje alternativo. En este caso, el reto de Aznar es convencer a los españoles que tiene unos planes económicos y fiscales capaces de poner la casa en orden y concierto. Así lo piensa y ese va a ser su discurso en los próximos meses, hasta las elecciones.

Obstinado Anguita

PEDRO VILLALAR

AYER se difundieron unas curiosas declaraciones de Anguita, el líder de IU, en las que afirmaba que existe una guerra ideológica a muerte entre la derecha y la izquierda, y que ésta ha claudicado en España: ni siquiera se habla ya de planificación de la economía.

La afirmación resulta a estas alturas tragicómica. Diríase que Anguita, encerrado en la urna de su fanatismo, no ha sido testigo de lo que ocurría a su alrededor en los últimos años. Porque no es que la izquierda haya renunciado a la planificación: es que ésta se ha demostrado pragmáticamente inservible para garantizar el desarrollo y el progreso de los pueblos. ¿O acaso Anguita quiere reproducir

aquellos fastuosos planes quinquenales de la desaparecida URSS con los que se consiguió pasar, como diría Groucho Marx, de la pobreza más sangrante a la más absoluta miseria?

En Europa existen una derecha liberal y una izquierda socialdemócrata. Ambas se diferencian entre sí en su propuesta sobre el tamaño del sector público y en la proclividad redistributiva. Pero más allá de ambas opciones sólo hay vacío. Por eso quien continúe defendiendo la planificación de la economía, la autarquía económica, el centralismo democrático o la socialización de los bienes de producción, ya ni siquiera es contestado en términos dialécticos: la respuesta es una sonora carcajada.

El Tribunal de Cuentas

ANTONIO PAPELL

EL prestigio de las instituciones públicas no se afirma con su funcionamiento rutinario, sino en aquellas ocasiones conflictivas en que es puesto a prueba por las circunstancias. El Tribunal de Cuentas, que según la Constitución es 'el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público', no tiene realce alguno ante la opinión pública y apenas ha saltado a la actualidad política —y para mal por cierto— con ocasión del llamado 'caso Filesa', en que no ha sabido estar a la altura de lo que se exigía de él.

Como es sabido, el Parlamento solicitó al Tribunal un informe sobre el referido escándalo, tras el cual parece ocultarse un sistema de financiación irregular del PSOE. El mandato responde asimismo a los preceptos constitucionales, ya que también la Carta Magna dice que el Tribunal de Cuentas 'dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas'. Lo demás es bien conocido: el informe exculpa completamente al PSOE con una endeble argumentación: examinada la contabilidad del Partido Socialista no aparecen las vinculaciones sospechosas entre dicha fuerza política y las empresas supuestamente utilizadas como instrumento de recaudación de fondos: Filesa, Malesa, Time Spot, Distribuidora Express 2000... El Tribunal no tiene competencias para fiscalizar empresas privadas, por lo que no ha podido examinar las contabilidades de dichas empresas; tampoco ha tenido en cuenta el cúmulo de información que le fue remitido por la fiscalía del Estado —llena de documentos comprometidos— porque no podía certificar su autenticidad, ni ha solicitado los misteriosos estudios que numerosas empresas privadas pagaron a precio de oro a Filesa (por un importe total de más de 800 millones) ni ha investigado los pagos realizados por dichas empresas en concepto de alquiler de locales del partido, ni ha recabado extractos bancarios del movimiento de las cuentas corrientes de los protagonistas del escándalo... En suma, se ha limitado a digerir la información que le ha sido voluntariamente suministrada y, sin pararse a considerar si semejantes datos eran o no suficientes para contestar al requerimiento del Parlamento, ha exculpado al PSOE. Curiosamente tanto el ponente de dicho dictamen como el presidente del

Tribunal de Cuentas fueron nombrados a propuesta del Partido Socialista.

Para mayor escarnio el 'informe' exculpatario fue, como se recordará, aprobado gracias al voto de calidad del presidente del Tribunal, quien deshizo el empate. Varios votos particulares de los miembros del Tribunal, disconformes con tal decisión, ponen de manifiesto que el Tribunal de Cuentas no tiene capacidad legal para responder a la solicitud del Congreso.

En este asunto estriba el meollo de la cuestión: la ley orgánica del Tribunal Constitucional otorga a éste competencias muy concretas y es probable que aunque el Tribunal de Cuentas es el encargado de fiscalizar las finanzas de los partidos políticos sea imposible que, por lo limitado de sus atribuciones, pueda llevar a cabo una tarea fiscalizadora en sentido estricto sobre aspectos presuntamente dolosos de la actividad financiera de los partidos. Pero si esto es así —y al margen de la gravedad del hecho de crear un órgano inútil que tendrá que asumir el Parlamento— la actitud digna del Tribunal de Cuentas sería la de manifestar que no tiene capacidad para responder al requerimiento parlamentario; en modo alguno esa incapacidad puede derivar en exculpación.

Es bien cierto que el Tribunal de Cuentas no es la inspección fiscal ni el juzgado de guardia. Y lo que el Congreso de los Diputados debió hacer probablemente no era recurrir al Tribunal de Cuentas sino constituir una comisión de investigación que si tomara en cuenta todos los datos disponibles. Pero resulta indecoroso en todo caso que el mencionado Tribunal utilice su impotencia para dar ánima al partido mayoritario.

Por lo demás lo ocurrido lleva a la opinión pública a cuestionarse si el Tribunal de Cuentas puede desempeñar correctamente su actividad fiscalizadora de las cuentas del Estado. Y semejante duda ha de desembocar por fuerza en un debate político sobre la cuestión, seguido de unas propuestas de reforma legislativa que otorguen a esta institución las facultades precisas para garantizar a la sociedad la operatividad del Tribunal. Porque es gravísimo que en la democracia española no haya una institución con credibilidad que sea capaz de censurar las cuentas del Estado y del sector público.

EL ANFITEATRO

Lluch, por la corresponsabilidad fiscal

El ex ministro Lluch, actual rector de la Universidad Menéndez y Pelayo, publicó ayer en la prensa económica de Madrid un resonante artículo en el que defiende la cesión a las Comunidades Autónomas del 15% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cesión que ha provocado una profunda división incluso entre las distintas autonomías controladas por los socialistas (como es sabido, en tanto los socialistas catalanes defienden esta fórmula de corresponsabilidad fiscal, el presidente de Extremadura, Rodríguez Ibarra, está en contra). Los argumentos de Lluch son definitivos: es necesario que las comunidades autónomas que se limitan a gastar tengan que afrontar también el desgaste que produce recaudar y que actualmente sólo sufre el Gobierno central. Asimismo, Lluch también niega que esta cesión sea insolidaria, por cuanto se trataría sólo de un anticipo a cuenta, previo a la liquidación definitiva.

Cada oveja con su pareja

Ayer el presidente de la patronal, José María Cuevas, afirmó en rueda de prensa que es hasta cierto punto natural aquello de "cada oveja con su pareja". Y en efecto, tanto Cuevas como el líder conservador Aznar criticaron ayer duramente los presupuestos del Estado. Cuevas pidió la congelación de las pensiones, en tanto Aznar, que hizo público su programa económico, prometía conge-

lación de los impuestos, así como elevar hasta los 16 millones el número de empleos en España para poder repartir mejor las cargas sociales, al tiempo que calificaba de "calamidad" la medidas intervencionistas adoptadas por el Banco de España para cortar la especulación sobre nuestra moneda. Al mismo tiempo sindicatos y Gobierno, al parecer plenamente reconciliados, negociaban la Ley de Huelga y llegaban a un práctico acuerdo sobre la misma. A lo que se ve la conjunción de la crisis económica con la proximidad de las elecciones generales ha obrado milagros.

¿Un nuevo Nuremberg?

Las Naciones Unidas han aprobado la creación de una comisión para investigar los crímenes de guerra que se están cometiendo en la guerra que viene desarrollándose en la antigua Yugoslavia y que podría convertirse en un tribunal semejante al de Nuremberg, creado por los aliados para castigar los crímenes del nazismo. La medida es acertada, pero parecería lógico que fuera precedida por una serie de acciones tendentes a evitar estos crímenes. Hay un cierto cinismo en inhibirse de las atrocidades mientras se están cometiendo y en crear al mismo tiempo un tribunal para juzgar tales excesos. Porque es bien evidente que la comunidad internacional se ha olvidado ya del drama de los Balcanes por mucho que las televisiones nos bombardeen monótonamente día a día con imágenes de nuevas salvajadas. Castigar a los culpables no eximirá de culpa a quienes nada han hecho por detener la matanza.